

Concepción, trece de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO, OIDOS Y TENIENDO PRESENTE:

I.- ANTECEDENTES GENERALES

1.- DEMANDA

En estos autos **RIT O-1305-2018** del Ingreso del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, Procedimiento de Aplicación General por otras declaraciones, compareció el **SINDICATO DE TRABAJADORES DE ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA, ASMAR TALCAHUANO**, RUT N° 65.529.550-K, y RSU 8050332, representado por su directiva sindical integrada por su presidente, don **Cristian Alexis Novas Placencia**, secretaria doña **Paula Andrea Del Pino Gecele**, tesorero **Cristhian Osvaldo Lagos Palma**, y directores **Pedro Ulloa Castillo** y **Edgardo Mauricio López Oportus**, todos domiciliados en Talcahuano Avenida Jorge Montt n° 250, Base Naval, quien deduce demanda en contra de **ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA (ASMAR)**, del giro de su denominación, representado por don **Harold Kauer Tapia**, Capitán de Navío, ambos con domicilio en Talcahuano, Avenida Jorge Montt n°250 Base Naval, fundada en las siguientes consideraciones:

1.1.- Antecedentes

Señalan que los trabajadores socios de la organización sindical demandante son trabajadores civiles de la demandada.

Conforme a lo establecido en el artículo 6° del Decreto Supremo N°658 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina de 1966, ratificada mediante Decreto Ley N°1.282 de 1975, los trabajadores Civiles de ASMAR tendrían derecho a percibir lo que se denomina "Asignación de Zona", la cual asciende a la suma equivalente al 20% del sueldo base de cada trabajador, esta asignación a la que actualmente aún tendrían derecho los trabajadores civiles de ASMAR, sólo se pagó hasta el mes de noviembre del año 1995, adeudándose en consecuencia desde dicha fecha, por otro lado, también se les adeudaría a los trabajadores que ingresaron con posterioridad, puesto que dichas norma aún estaría vigentes.

En efecto, indican que el empleador a contar del mes de noviembre de 1995 habría dejado de pagar esta asignación a todos los trabajadores civiles que tenían contrato vigente a la fecha y a los que se incorporaron con posterioridad.

Para lograr esta determinación y consiente que unilateralmente no podría alterar los contratos de los trabajadores la demandada en el mes de noviembre de 1995 los habría conminado a suscribir una anexo de



contrato en el cual se eliminaba la asignación de zona y se aumentaba el sueldo base.

A su respecto, dicho anexo, sólo habría tenido el efecto de aumentar dicho sueldo base, pero, bajo ningún punto de vista habría tenido la capacidad o idoneidad para modificar una norma legal que establecía el derecho de los trabajadores a percibir la asignación de zona, manteniéndose vigente su derecho a percibirla no obstante dicho anexo.

Agregando que en lo referente a los trabajadores contratados luego del mes de noviembre de 1995, a éstos simplemente se les adeuda el correspondiente pago, por lo ya expuesto.

Reitera la vigencia de las normas en comento, pese a la dictación de la ley N°18.292 Orgánica de Asmar, pues sería claramente compatible con aquellas.

Reitera que el anexo a que se alude carecería de valor suficiente para dejar sin efecto una asignación establecida por ley y por ende irrenunciable conforme lo prescribe el artículo 5° del Código del Trabajo, y sólo producía el efecto natural de aumentar el sueldo base de los trabajadores. Ningún efecto tendría respecto de los trabajadores que ingresaron posterior al mes de noviembre de 1995 quienes no habrían firmado anexo alguno encontrándose vigente la asignación legal.

1.2.- Naturaleza de la asignación de zona

Al respecto indica que la asignación de zona no sería imponible, y se encuentra regulada en general en el art. 7° del Decreto Ley 249 del año 1974, estableciendo para la provincia de Concepción, ésta correspondería al 20% del sueldo base del trabajador, a su vez, este mismo artículo en su inciso segundo establece que quienes tienen derecho a la misma, son aquellos trabajadores de todos los servicios, instituciones, empresas y entidades del sector público a los cuales la legislación vigente al 31 de diciembre de 1973 le otorgaba este beneficio.

Asimismo, según lo dispuesto en el inciso 3°, “Los porcentajes se calcularán para los trabajadores a quienes se aplica la escala del artículo 1°, sobre el sueldo de dicha escala. Respecto de los demás se calcularán sobre la base de sus remuneraciones mensuales permanentes”.

Luego en el inciso quinto establece: “La asignación de zona se devengará mientras el trabajador conserve la propiedad de su empleo en la provincia o territorio correspondiente.”

A su entender, los trabajadores de Asmar tendrían derecho a esta asignación, por cuanto su normativa se aplica no sólo a aquellos señalados expresamente en los artículos 1 y 2 del Decreto Ley 249, sino también, a los demás trabajadores a los que las leyes vigentes a esa época entregaban



tal asignación, siempre y cuando trabajen para un Servicio, Institución, Empresa o Entidad pública, conforme a lo establecido en los incisos segundo y tercero del artículo 7° del citado Decreto Ley, en cuanto indica la base sobre la cual corresponde aplicar el porcentaje para quienes se rigen por la escala única de sueldos, y para quienes no, en otras palabras hay trabajadores que no se rigen por la Escala única de sueldos, y no obstante aquello, igualmente tienen derecho a la asignación de Zona, esos otros trabajadores que tienen derecho a la Asignación de Zona son aquellos que trabajan en “Servicios, Instituciones, Empresas y Entidades del sector público a los cuales la legislación vigente al 31 de diciembre de 1973 otorgaba este beneficio”. Posteriormente el Decreto Ley 450 sustituye el respectivo artículo 7 por el artículo 26, manteniendo inalterable el derecho, y el requisito de que al 31 de diciembre de 1973 en dichas empresas existiera el beneficio, lo que se cumpliría respecto de ASMAR, al tratarse de una empresa pública.

Indica que en el caso sub lite, a los trabajadores de Asmar se les habría otorgado el derecho a percibir esta asignación mediante lo dispuesto en el Decreto Supremo N°658 del año 1966, del Ministerio de Defensa. Señala que esta norma habría sido posteriormente confirmada, o más bien ratificada mediante el D.L. N°1.282 de 1975, norma que al ratificar el Decreto supremo, hizo que éste adquiriera rango o estatus legal, y en ese mismo sentido se habría aplicado sin ninguna variación, ni cuestionamiento hasta el año 1995, fecha en la cual unilateralmente la empresa habría dejado de pagarla, no obstante que la norma que ordenaba su pago, actualmente se encontraría vigente, pues no ha sido derogada expresa ni tácitamente, al menos en dicha parte.

1.3.- Acción unilateral de la demandada al dejar de pagar la asignación reclamada

Indica que no obstante lo anterior, la empresa demandada en el mes de noviembre de 1995 habría decidido dejar de pagar la asignación, amparada en una consulta que habría efectuado la propia Dirección de Asmar a la Contraloría General de la República, la que erradamente habría informado la derogación de la norma que le daba el sustento legal al derecho a percibir la asignación, fundado principalmente en la dictación de la ley 18.296 Orgánica de Asmar, en cuanto en su artículo 13, número 15 habría establecido la facultad del Consejo Superior de Asmar, órgano creado a partir de su propia dictación, a aprobar la planta y fijar las remuneraciones del personal civil contratado por ASMAR. Con la dictación de esta normativa se habría producido en consecuencia, según ella, la derogación de toda aquella normativa referente a la asignación de zona,



específicamente el DS. 658 de 1966, que adquirió rango legal en virtud del Decreto ley 1282.

Criterio que controvierten latamente los demandantes según lo que expone en su libelo pretensor.

1.4.– En subsidio, asignación de zona procede por actos de la propia empresa

Expresa que en subsidio de lo anterior, y sin perjuicio de lo señalado con respecto a la vigencia del DS 658 de 1966, del análisis de la actuación histórica de la demandada, de las responsabilidades y actuaciones del Consejo Superior de Asmar y de lo establecido en los dictámenes de la Contraloría General de la República se podría sostener válidamente que los trabajadores civiles de Asmar tienen derecho de igual modo a la asignación de zona.

Efectivamente, por medio de la presente demanda se efectúa el cobro de una prestación laboral objetiva adeudada por la demandada, consistente en la asignación de zona, la que ha dejado de pagarse por la empresa respecto de aquellos trabajadores contratados antes del año 1995 en virtud de un anexo de contrato, y respecto de aquellos contratados con posterioridad al mes de noviembre de dicho año, simplemente por voluntad propia, incumpliendo la normativa legal vigente, más allá de lo que haya señalado la CGR.

Expresa que la actual LOC de Asmar entró en vigencia el año 1984, y el dictamen de la Contraloría lo fue en el año 1989, y recién después del año 1995 la empresa dejó de pagar la asignación, todo lo anterior deja en evidencia que ni la dictación de la ley 18.296, ni el propio dictamen de la Contraloría tuvieron el efecto de hacer cesar el derecho a asignación de zona, ni tampoco tuvo el efecto de hacer cesar su pago, el que se continuó realizando sin ningún inconveniente hasta más de una década después de la dictación de la ley que supuestamente hacía cesar el pago, o incluso 6 años después del dictamen, ello resulta extremadamente llamativo, sin embargo, en derecho toda acción tiene una consecuencia jurídica, sobre todo en el caso de la demandada que tiene un régimen normativo especial, y en este caso, la consecuencia jurídica se traduce en que la asignación de zona se encontraría plenamente vigente, el propio dictamen de la Contraloría General de la República les daría la razón.

Agrega que desde la entrada en vigencia de la ley N° 18.296, el Consejo Superior de ASMAR es el único competente para regular las remuneraciones del personal civil de ASMAR (en virtud del artículo 13 N° 15 de dicha ley).– y finalmente el dictamen N° 10300/030/8, del año 2005 “...En consecuencia, cabe concluir que el personal civil de los Astilleros y



Maestranzas de la Armada que se desempeña en Talcahuano y en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, sólo podrán percibir el beneficio económico por el cual se consulta, en la medida que el mismo sea fijado por el Consejo Superior de dicha entidad, dentro de los estipendios que se les pagan a tales empleados”.

Y los dictámenes sucesivos de la CGR no fueron acatados por el Consejo Superior y se siguió pagando la asignación, cumpliendo así con el mandato que los propios dictámenes señalan, en el sentido que si los trabajadores siguieron percibiendo tal asignación fue porque el propio Consejo así lo dispuso cumpliendo así con el mandato de la LOC y el dictamen de la CGR, incluso más allá del año 1989 cuando se produjo el primer dictamen, no pudiendo entonces la demandada desdecirse de sus propias actuaciones, y por ende, no teniendo facultades la CGR para reprochar tal actuación ajustada a la ley pues de lo contrario se habría ordenado la restitución de los dineros mal habidos.

1.5.- Peticiones concretas

Pide en consecuencia acoger la demanda con costas establecer que los demandantes tienen derecho a percibir la asignación de zona correspondiente al 20% de su sueldo base, ordenando el pago de la misma.

2.- CONTESTACION

2.1.- Excepciones

2.1.1.- Incompetencia por ser materia de conocimiento de la Contraloría General de la República

En primer término opone la excepción de incompetencia absoluta del tribunal, por cuanto la materia sometida a conocimiento del tribunal sería de competencia de la Contraloría General de la República, como primer argumento.

Cita jurisprudencia administrativa al respecto y menciona una serie de dictámenes que se han pronunciado sobre la materia objeto de este juicio.

Así las cosas, al tener competencia exclusiva la Contraloría el tribunal debe abstenerse de conocer de esta materia.

Incompetencia en razón del artículo 420 del Código del Trabajo

En subsidio de lo anterior señala que el tribunal sería incompetente para conocer de esta materia por cuanto no estaría contemplado en el artículo 420 del Código del Trabajo en ninguna de sus letras, y es más, habría pronunciamientos diversos de la CGR al respecto.

Ausencia de facultades para conocer la acción de nulidad que ha sido impetrada



La parte demandante sostiene que el actuar de ASMAR no se condeciría con la ley, específicamente con el Decreto Ley N° 1.282, aduciendo incluso que los anexos de contrato suscritos en el año 1995 con algunos de los demandantes serían nulos.

Desarrolla latamente esta alegación, no obstante si se observa el petitorio de la demanda no se indica nada al respecto, de tal forma que resulta inoficioso referirse al detalle de las alegaciones en este aspecto.

2.1.2.- Falta de legitimidad activa

Indica que el Sindicato carece de legitimidad activa para incoar este procedimiento por cuanto no contaría con un mandato de sus asociados conforme lo prescribe el artículo 220 del Código del Trabajo, en su numeral 2°.

Cita al respecto jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que se pronuncia al respecto.

No contando entonces con dicho mandato especial para representar a sus afiliados respecto de prestaciones de sus contratos individuales, no puede representarlos en este procedimiento.

Pide en consecuencia así declararlo y acoger la excepción de falta de legitimidad activa.

2.1.3.- Falta de legitimidad pasiva

De igual forma opone la excepción perentoria de falta de legitimidad pasiva en consideración a que sería el Consejo Superior de Asmar quien según su LOC tendría la exclusividad de determinar las remuneraciones del personal civil de la demandada siendo la Contraloría General de la República el ente contralor del mismo, y no el juzgado del trabajo en los términos como lo ha planteado la demandada.

2.1.4.- Excepción de finiquito

En subsidio de las anteriores opongo también la excepción de finiquito respecto de aquellos trabajadores que dejaron de pertenecer a Asmar y que suscribieron finiquito sin tener reserva alguna que efectuar, por lo que a sus respecto, no existiría pretensión que detenten encontrándose éstas extinguidas.

Así ocurriría con los trabajadores: José Genaro Sanzana Bravo; Alejandro Orlando Sánchez Guzmán; Alexis Fabián Salgado Peñaloza; Oscar Rubén Peña Jiménez; Miguel Estaban Hernández Silva; Sergio Andrés Daviu Jara; Alejandro Andrés Cártes Miranda; Pedro Antonio Aguilera Villa; Robinson del Tránsito Valdebenito Fonseca; José Desiderio Ríos Sánchez; René Emilia Ponce Fuentes; Enrique Fernando Mortecinos Durán; Mauricio



Andrés Henríquez Agurto; Ramón Alejandro Fiero Briones; Reinaldo Adolfo Espinoza Luna; Víctor Enrique Domínguez Sepúlveda; Guillermo Eleuterio Carrera Martínez; José del Carmen Bastías Espinoza; Carlos Amado Arriagada Balboa; Oscar Mario Arriagada Aravena; Ismael del Carmen Araya Pérez; y Yanco Alexis Collarte Vásquez.

2.1.5.- Excepción de prescripción extintiva

En subsidio de las anteriores opone excepción de prescripción extintiva de dos años prevista en el artículo 510 inciso primero del Código del Trabajo, de cualquier derecho laboral o beneficio pretendido por cada uno de los actores, en cuanto demandan la supuesta asignación de zona, por el período anterior al 30 de agosto del año 2016, toda vez que la demanda de autos fue presentada el 30 de agosto del año 2018.

En efecto, vigente el vínculo que une a las partes, en lo que dice relación con la prescripción de los derechos, se aplica la regla general, esto es, prescriben en el plazo de dos años contados desde la fecha que se hicieron exigibles.

Las prestaciones pretendidas por los actores no son otra cosa que remuneraciones que se encuadran en el concepto del artículo 41 del Código del Trabajo y, como tal, protegidas por el mismo Código, quien otorga a los interesados acción para su cobro, esto es, ante un Tribunal Laboral, por lo que, es procedente la aplicación de la norma en comento, al no contener, la norma que otorga el beneficio, una norma especial respecto del plazo de prescripción o ejercicio de la acción.

Por lo anterior, solicito a al tribunal declarar prescritos todos los supuestos derechos laborales de cada uno de los actores de autos, cuya exigibilidad es mayor a dos años contados hacia atrás, desde que se habrían hecho exigibles hasta la notificación de la demanda, o en su defecto, hasta la presentación de la misma, ocurrido el 30 de agosto de 2018.

2.2.- Alegaciones de fondo

2.2.1.- En cuanto al derecho de los trabajadores de Asmar a percibir la asignación de zona

Al respecto indica que como cuestión previa se hace presente que en ASMAR conviven un doble grupo de personas que se desempeñan en ella: por una parte los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, como es el caso de aquellos que agrupan al Sindicato demandante, y por otra parte, los servidores navales, que son funcionarios de carrera destinados en esta empresa.



En cuanto al marco que regula la determinación de las remuneraciones del personal civil de ASMAR, y los beneficios que en su favor proceden, se destaca el artículo 13 N° 15 de la Ley N° 18.296, en lo referente a las facultades que tendría el Consejo Superior.

Acorde lo anterior, expresa que el derecho del personal civil a percibir la asignación de zona debe ser determinado por el CONSEJO SUPERIOR DE ASMAR, ya que nadie más contaría con dicha prerrogativa.

Dice que así también se habría pronunciado la Contraloría General de la República en diversos dictámenes, rechazando las peticiones de distintos sindicatos en orden al pago de la asignación de zona o evacuando preguntas que el propio órgano superior aludido habría hecho en su oportunidad.

Sin perjuicio de lo expuesto, señala que resultaría útil recordar que los Astilleros y Maestranzas de la Armada, en su Resolución N°120, de 22 de noviembre de 1995, dispuso que, a contar de esa data, la remuneración mensual del personal civil era igual al monto que resultaba de sumar el sueldo base y las asignaciones que menciona, entre ellas, la de zona, cuando correspondiese; mecanismo de cálculo que mantuvo su vigencia hasta la dictación de la citada resolución N° 10300/030/8, del año 2005, que fijó un nuevo sistema para determinar los estipendios del mencionado personal, el que, como ya se indicó, no consideró el pago de la asignación de zona.

En consecuencia, cabe concluir que el personal civil de los Astilleros y Maestranzas de la Armada que se desempeña en Talcahuano y en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, sólo podrán percibir el beneficio económico por el cual se consulta, en la medida que el mismo sea fijado por el Consejo Superior de dicha entidad, dentro de los estipendios que se les pagan a tales empleados”, agregando que en todo caso, esto no se podría establecer por el principio de legalidad contemplado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política.

De conformidad con lo ya explicado, los trabajadores de ASMAR están sometidos a su contrato de trabajo y a las disposiciones aplicables a los trabajadores del sector privado, no obstante ser funcionarios públicos. Sobre esa base, no correspondería aplicar a estos trabajadores el régimen a que está supeditado un funcionario fiscal propiamente tal, regido por el Estatuto Administrativo, por lo que carecería de argumento lo sostenido por los demandantes, en orden a que se les estaría discriminando respecto del resto del personal de la Armada, pues los mismos se encuentran regulados por un estatuto jurídico diverso y no existiría pronunciamiento del Consejo respecto de haber fijado una asignación obligatoria distinta de las que se otorgan según el Código del Trabajo.



Luego hace referencia a la historia del establecimiento del actual sistema de remuneraciones de la entidad para el personal civil. De esta forma, estando en plena vigencia la Ley 18.296, y en uso de sus facultades otorgadas por la Ley Orgánica de ASMAR, el Consejo Superior a partir del año 1994, inició un análisis relativo a un Nuevo Sistema de Remuneraciones para los trabajadores de ASMAR, donde se analizan las ventajas de su implementación. Tras diversos análisis, es aprobado por este órgano, y se ordena al Director de ASMAR dicte una resolución e instrucción para detallar su implementación. Para la aprobación de este nuevo sistema de remuneraciones de ASMAR, el Consejo Superior tuvo en vista una serie de ventajas que detalla en su escrito de contestación, concluyendo que lo más beneficioso para el personal civil era igual el sueldo base a un de mercado eliminando una serie de asignaciones que hacían engorroso el pago de las remuneraciones.

Lo anterior habría sido el resultado de un extenso proceso de estudio que se vería reflejado en las actas del Consejo y que contaría con estudios técnicos que avalarían la decisión final, que se contempla en la resolución N°120 de fecha 22 de noviembre de 1995, mediante la cual se aprueba el Nuevo Sistema de Remuneración; y los diversos niveles, cargos y encasillamiento del personal civil de la entidad, y se elimina la asignación de zona, entre otras, para el personal civil, incorporando su valor al sueldo base.

De esta forma, y en cumplimiento de este nuevo sistema de remuneraciones, es que se propuso a los trabajadores de todas las plantas la suscripción de anexos, incluyendo los de ASMAR Talcahuano y ASMAR Punta Arenas.

Sería en ese marco que los trabajadores demandantes de autos, que a esa fecha eran trabajadores de ASMAR, habrían firmado libre y voluntariamente los respectivos anexos de sus contratos para los efectos de ajustar sus contratos de trabajo al nuevo sistema de remuneraciones.

De esta forma, a su parecer, no habría pérdida alguna para los trabajadores quienes libre y espontáneamente habrían firmado las modificaciones a sus contratos de trabajo ajustándose a esta nueva forma de pagar las remuneraciones.

Desde esa fecha, o sea ya más de veinte años, que no se aplica en la empresa ASMAR el pago de asignación de zona a sus trabajadores.

2.2.3.- Derogación de las normas que establecían la asignación de zona: legalidad de la actuación del Consejo Superior

Dice que la demanda plantea en esencia que el artículo 6° del Decreto Supremo N° 658 de 1966 y el Decreto Ley N° 1.282 de 1975 se



encontrarían vigentes, porque no se derogaron expresamente, y porque no sería la asignación de zona establecida en dichas disposiciones, incompatible con la facultad del Consejo Superior de fijar las remuneraciones.

Sin embargo, indica que cabría tener presente que la derogación puede ser expresa o tácita, conforme lo disponen los artículos 52 y 53 del Código Civil.

Así señala que en lo concreto y sin perjuicio de lo que se señala más adelante en la contestación, la nueva ley LOC de Asmar habría establecido la facultad soberana del Consejo Superior de ASMAR para fijar las remuneraciones de los trabajadores de la empresa. Sin duda se derogaron normas anteriores que establecían beneficios que formaban parte de las remuneraciones de dichos trabajadores, cuando a partir de la nueva ley hay un órgano interno y superior en ASMAR con especial atribución de fijar las remuneraciones.

Lo anterior se condeciría con la historia fidedigna de la Ley 18.296, en la que se expresa que el proyecto presentado a debate legislativo pretende precisamente organizar el conjunto de normas dispersas existente sobre la materia y organizando la entidad de un modo totalmente diverso al existe a la fecha de la dictación de la ley. El escrito de contestación contiene en detalle estos aspectos.

Dice además, que respecto a la derogación, en esta materia el legislador se habría pronunciado de manera expresa, al señalar en el artículo 33 de la ley N° 18.296 lo siguiente “Derógase el decreto con fuerza de ley N° 321, de 1960, en su texto fijado por decreto N° 353, de Marina, de 1977, y sus modificaciones, y toda otra norma legal o reglamentaria que sea contraria a lo dispuesto en esta ley.”

Agrega que dado lo anterior, si la ley N°18.296 del año 1984 en su artículo 13 N° 15 entregó al Consejo Superior de ASMAR la potestad de “fijar las remuneraciones del personal civil contratado por ASMAR”, no cabe dudas que otras normas que se refieran con anterioridad a este asunto, esto es fijar/establecer régimen de remuneraciones del personal contratado por ASMAR, como sucedería con el antedicho Decreto Ley N° 1282 del año 1975 que tenía precisamente como objeto fijar el “régimen de remuneraciones del personal de Astilleros y Maestranzas de la Armada”, se encontrarían derogadas.

Agrega que efectivamente tienen estatutos jurídicos diferentes los funcionarios de la Armada destinados a ASMAR y los funcionarios civiles trabajadores de ASMAR. Esto justifica la existencia de una asignación de zona para los trabajadores Armada y que la asignación de zona para empleados civiles pudiera ser eliminada por el Consejo Superior de ASMAR



en uso de sus facultades legales. De hecho, el vínculo laboral es distinto, toda vez que los contratados por ASMAR, tienen a ASMAR como empleador y no al Fisco como los funcionarios de la Armada (en este sentido el dictamen 29.701 de 2012 de la CGR).

De la forma explicada, señala que se debe entender inequívocamente que se encontrarían derogadas expresamente las normas que establecían el derecho a la asignación de zona de trabajadores de ASMAR, lo que por sí sólo basta para el total rechazo de la demanda de autos.

2.2.4.– Legalidad de la actuación del Consejo Superior de ASMAR

En el caso de autos, la empresa a través de su Consejo Superior, ha actuado conforme al principio de legalidad y de supremacía constitucional. La Ley N° 18.296 entregó al Consejo Superior la potestad de fijar las remuneraciones del personal civil de ASMAR (Funcionarios públicos regidos por el Código del Trabajo), lo que en la práctica aconteció durante el año 1995, y que terminó en la suscripción de anexos de contrato de trabajo por parte de los demandantes que se encontraban laborando en esa época en ASMAR. La ley que estableció el derecho a percibir asignación de zona quedó entonces derogada expresamente.

En consecuencia, desconocer esta potestad del Consejo Superior vulneraría el orden público, y significaría en la práctica sustituir la actividad administrativa a través de una sentencia.

Por su parte y adicionalmente señala que el concepto “asignación de zona” que se pagaba en ASMAR antes del año 1995, o sea hasta antes de la firma de los anexos que reflejaron el nuevo esquema de remuneraciones de ASMAR, no tenía la misma naturaleza jurídica de la que reclaman los demandantes, esto es, como una copia fiel de la que se paga para el sector público. La asignación de zona que se pagaba en ASMAR era imponible y tributable, en cambio la del sector público no es ni ha sido imponible ni tributable.

De esta forma, la asimilación que pretenden los demandantes nunca ha existido jurídicamente, lo que hace más clara aún la facultad del Consejo Superior de ASMAR de pronunciarse sobre las mismas.

2.2.5.– Sobre la validez o nulidad de los anexos de contratos de trabajo

En este acápite hace una serie de aseveraciones relativas a la nulidad ordinaria y la nulidad de derecho público con relación al anexo de contrato que suscribieron los trabajadores el año 1995, pero resulta inoficioso siquiera resumir tales alegaciones en este fallo, por cuanto la nulidad del referido anexo de contrato no se encuentra pedida por la demandada, y la referencia que se hace a ella en el escrito de la demanda más bien es de



carácter argumental para reforzar sus peticiones principales, ya que entiende que cualquier alegación al respecto sería extemporánea, por más que se esfuerce el demandante en hacer referencia a ella en las observaciones a la prueba, ha precluido su derecho al no hacerla valer expresamente en la demanda, sin perjuicio de lo que se ha señalado relativo a su extemporaneidad.

Lo mismo cabe señalar respecto a las alegaciones de prescripción que hace la demandada en este acápite.

2.2.6.– Otras alegaciones de la demandada

a).– Pacta sunt servanda y buena fe en el cumplimiento de los contratos

Al respecto, tras una serie de aseveraciones de carácter teórico y general, señala que en el caso sub lite sería innegable los actores tendrían contratos de trabajo y anexos de contrato suscritos, donde quedaría claro que no se comprende la denominada asignación de zona que reclaman en este juico. De lo anterior, se podría concluir que en el caso de la demandada, los pactos remuneratorios no pueden desconocerse, y menos aún como en el caso de autos, por una interpretación arbitraria y errada de la parte que en este caso lo invoca.

En otro orden de ideas, la buena fe contractual subyacería en todos los ámbitos jurídicos y exige observar una actitud de respeto, de lealtad y honradez en el tráfico jurídico, tanto cuando se esté ejercitando un derecho, como cuando se esté cumpliendo con un deber. La Jurisprudencia ha señalado que "la buena fe es la conciencia, esto es, el conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, de las obras, hechas sin fraude ni engaño".

b).– Teoría de los actos propios

Dice que lo anterior guardaría estrecha relación con la doctrina de los actos propios, la cual sería derivación directa del principio de la buena fe, toda vez que los demandantes, al interponer el libelo, no han guardado la coherencia debida con los contratos de trabajo suscritos por ellos mismos en forma libre y voluntaria durante toda la relación laboral y no podrían ahora hacer valer u a conducta contraria a sus actuaciones pretéritas con un único ánimo ganancial.

Agrega que esta teoría podría ser aplicada aun en contra de los derechos irrenunciables de los trabajadores, si acaso ha existido un ejercicio abusivo de tal clase de derechos. La distinción en la cual se sostiene esta hipótesis es la existente entre ejercicio no abusivo de los derechos laborales y ejercicio abusivo de tal clase de derechos, y los actores habrían incurrido en tal conducta.



c).- Pronunciamientos de La Contraloría General de la República

Expresa que la CGR sería el órgano fiscalizador, al cual le correspondería la interpretación y fiscalización de las normas que regulan la relación laboral entre ASMAR y su personal civil, como ya se ha señalado, al momento de solicitarse la declaración de incompetencia absoluta.

En este contexto, habría que tener presente que la controversia que este asunto que ha sido objeto de tres presentaciones a dicha entidad fiscalizadora, y en todas ellas se habría arribado a la misma conclusión negativa para los demandantes en orden a que no le correspondería percibir tal asignación.

Por esta razón, dice que en este acápite, resultaría pertinente invocar el principio de deferencia que consagraría la doctrina y jurisprudencia nacional respecto al carácter de especialistas que tienen los organismos públicos sobre las materias que son de su exclusiva competencia.

En el presente caso, la Contraloría General de la República sería el órgano del Estado al que la ley le habría entregado la competencia y capacidad técnico-administrativa necesaria para determinar la correcta interpretación y aplicación de las normas de derecho administrativo, sin perjuicio de los controles jurisdiccionales que correspondan.

Dice que concluir lo contrario sería vulnerar gravemente el principio de confianza legítima y de especialidad que regirían los actos de la administración.

Finalmente pide el rechazo de la demanda en todas sus partes.

3.- LOS HECHOS DE LA CAUSA

En la audiencia preparatoria, se llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo, fijando como hechos controvertidos los siguientes:

1.- Calidad contractual de los trabajadores de Asmar que representa el Sindicato.

2.- Titularidad del Sindicato o su Directorio para incoar la acción de autos.

3.- Efectividad que los trabajadores civiles de Asmar tienen derecho a percibir el pago del 20% por concepto de derecho de asignación de zona. En la negativa, fecha de término del beneficio y circunstancias de la misma.

4.- En caso afirmativo, efectividad de encontrarse íntegramente pagada.

5.- Componente de las remuneraciones de los trabajadores civiles de Asmar que representa el Sindicato. Modalidades y normativa que la regula.

6.- Efectividad de concurrir los plazos de prescripción alegados por la demandada.



7.- Efectividad de haber operado el poder liberatorio del finiquito alegado por la demandada respecto de los trabajadores que singulariza en su contestación.

4.- PRUEBA RENDIDA EN AL AUDIENCIA DE JUICIO

4.1.- Prueba de la parte demandante

-Documental:

1.- Listado actualizado de socios del sindicato al 31 de diciembre de 2018.

2.- Certificado de vigencia de la directiva sindical del Sindicato de trabajadores de Astilleros y Maestranza de la Armada número 805/2019/1.

3.- Acta de asamblea extraordinaria del Sindicato de Trabajadores de Astilleros y Maestranza de la Armada respecto de requerimiento e instrucciones para iniciar acciones legales de cobro por la asignación de zona adeudada, con nómina, firma y huella de socios. (Se contiene en el libro de actas).

4.- Cuadro comparativo de funciones Junta de Vigilancia y Consejo Superior de ASMAR (art. 13 Ley N° 18.296).

5.- Decreto Ley 450 de 4 de mayo de 1974, que fija escala Única de sueldos.

6.- Impresión de página web institucional de ASMAR sección remuneraciones del Personal.

7.- Estados de situación financiera individuales de Asmar al 31 de diciembre de 2016 y 2017.

8.- Contrato de trabajo de fecha 1 de abril de 1994, entre Asmar y don Edgardo López Oportus en que consta obligación pago de zona, y anexo de fecha noviembre de 1995.

9.- Liquidación de remuneraciones de trabajador Edgardo López Oportus correspondientes al año 1995 y 1996.

10.- Liquidación de remuneraciones trabajador Cristian Lagos Palma correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 1995, donde consta pago asignación de zona, y diciembre de 1995 donde ya no se paga la asignación.

11.- Anexo de fecha noviembre de 1995, entre Asmar y Jorge Fica, en virtud del cual se elimina asignación de zona.

12.- Copia de liquidación de remuneraciones correspondientes al trabajador José Villouta correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1995.

-Exhibición de documentos:

1.- Liquidaciones de remuneraciones de la totalidad de los socios del Sindicato de Trabajadores de Asmar, de acuerdo a nómina acompañada, y



de acuerdo a los registros de la propia empresa en cuanto a la afiliación sindical, por el periodo comprendido entre los meses de junio de 2016 a diciembre de 2018, ambos inclusive.

2.- Libro o planilla de Remuneraciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada, de los años 1984, 1989, 1995, 2016 a 2018 inclusive, en lo que respecta a la totalidad de los socios del sindicato, formato material o digital.

3.- Contratos de trabajo y sus respectivos anexos de cada uno de los socios del sindicato de trabajadores de Asmar.

4.- Actas y resoluciones emanadas del Consejo Superior de ASMAR relativas a remuneraciones correspondientes a los años 1984, 1989, 1994 y 1995 completos. Y presupuestos correspondientes a dichos años.

5.- Resolución n° 120 (10.300/97) de 22 noviembre 1995 de Asmar.

6.- Presupuesto 2018 aprobado por el Consejo Superior de ASMAR, y resolución que lo aprueba.

7.- Balance y estados financieros de ASMAR año 2016, 2017, y 2018.

8.- Copia de la memoria anual de Asmar correspondiente a los años 2017 y 2018.

Estos documentos fueron exhibidos parcialmente por la demandada aludiendo a la imposibilidad física de tenerlos disponibles por su data y por la pérdida de los mismos tras el maremoto de 2010 que afectó las dependencias de la Armada en Talcahuano.

-Confesional:

Absolvió posiciones en representación de la demandada don Sergio Raccoursier Núñez.

Su declaración íntegra consta en la sesión de la audiencia de juicio del día 24 de septiembre de 2021.

-Testimonial:

Declararon en la audiencia de juicio en la sesión del día antes indicado, los siguientes testigos:

1.- Don Manuel Tornel Oliveros.

2.- Don. Edgardo Mauricio López Oportuz.

3.- Don Mikel Gotzon Capetillo Cárdenas.

4.- Doña Paula Andrea del Pino Gesele.

-Oficios:

Se da lectura y se incorpora a través del sistema informático la respuesta de la **Contraloría General de la República**.

-Causa a la vista:

Se incorporó la causa RIT **O-784-2018** caratulada Sindicato de empleados de Asmar con Astilleros y Maestranzas de la Armada, del ingreso de este tribunal, en especial informe en derecho titulado Derecho a



percibir asignaciones de zona trabajadores civiles de Asmar de fecha 12 de julio de 2018, elaborado por Pablo Ruiz Tagle Vial e informe de asignación de zona para trabajadores de Asmar elaborado por Denis Muñoz Figueroa, que consta en dichas causas.

-Pericial:

Se evacuó pericia contable por parte del perito judicial don Manuel Jesús Figueroa Barriga, quien compareció a la audiencia de juicio a exponer oralmente las conclusiones del informe pericial y responder las preguntas de las partes.

Su declaración íntegra consta en la sesión de audiencia de juicio del día 13 de agosto de 2021.

4.2.- Prueba de la parte demandada

-Documental:

- 1.- Acta de Constitución del Consejo Superior de fecha 01/03/1984.
- 2.- Acta de la vigésima reunión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada, de fecha 09/06/1988; firmado por el capitán de Fragata Patricio Oyanedel Astudillo, Secretario del Consejo.
- 3.- Acta de la vigésima tercera sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 3/4/1989.
- 4.- Acta de la vigésima cuarta sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 5/6/1989, firmado por el capitán de Corbeta AB Alfonso Castro Guerrero, Secretario.
- 5.- Acta de la vigésima sexta sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 24/10/1989; firmado por el capitán de Corbeta AB Alfonso Castro Guerrero, Secretario.
- 6.- Acta de la vigésima séptima sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 6/12/1989; firmado por el capitán de Corbeta AB Alfonso Castro Guerrero, Secretario.
- 7.- Acta de la vigésima octava sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 3/4/1990; firmado por el capitán de Corbeta AB Alfonso Castro Guerrero, Secretario.
- 8.- Acta de la vigésima Novena sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 3/8/1990; firmado por el capitán de Corbeta AB Alfonso Castro Guerrero, Secretario.
- 9.- Acta de la trigésima sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 6/12/1990; firmado por el capitán de Corbeta AB Alfonso Castro Guerrero, Secretario.
- 10.- Acta de la trigésima primera sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 24/5/1991; firmado por el capitán de Corbeta AB Alfonso Castro Guerrero, Secretario.



- 11.- Acta de la trigésima segunda sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 25/9/1991; firmado por el capitán de Corbeta AB Alfonso Castro Guerrero.
- 12.- Acta de la trigésima tercera sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 10/6/1992; firmado por el capitán de Corbeta AB Alfonso Castro Guerrero, Secretario.
- 13.- Serie de documentos conformados por:
- a.- Decreto Ordinario 4.671/17; que cita reunión a Consejo Superior de fecha 28/8/1992, firmado por el Vicealmirante Claudio Aguayo Herrera, Presidente del Consejo Superior.
 - b.- Acta de la trigésima sexta sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 4/9/1992; firmado por el capitán de Corbeta AB Alfonso Castro Guerrero, Secretario.
 - c.- Memorándum de fecha 31/8/1992; firmado por el ContraAlmirante Sergio García Grenne, Director.
- 14.- Acta de la trigésima séptima sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 9/10/1992; firmado por el capitán de Corbeta AB Alfonso Castro Guerrero, Secretario.
- 15.- Acta de la trigésima novena sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 3/12/1992; firmado por el capitán de Corbeta AB Alfonso Castro Guerrero, Secretario.
- 16.- Informe Anual del Director sobre Plantas y unidades funcionales del año 1993.
- 17.- Acta de la cuadragésima sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 23/3/1993; firmado por el capitán de Corbeta AB Eduardo Román Sandoval, Secretario.
- 18.- Acta de la cuadragésima cuarta sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 17/12/1993; firmado por el capitán de Corbeta AB Eduardo Román Sandoval, Secretario.
- 19.- Acta de la cuadragésima séptima sesión del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 27/4/1994; firmado por el capitán de Corbeta AB Eduardo Román Sandoval, Secretario.
- 20.- Acta reunión de trabajo número 5/94; Consejo superior de ASMAR, de fecha 7/7/1994 firmado por el capitán de Corbeta AB Eduardo Román Sandoval, Secretario.
- 21.- Acta reunión de trabajo número 7/94; Consejo superior de ASMAR, de fecha 5/10/1994 firmado por el capitán de Corbeta AB Eduardo Román Sandoval.
- 22.- Acta de la sesión N° 51 del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 09/11/1994; firmado por el capitán de Corbeta AB Eduardo Román Sandoval, Secretario.



- 23.- Acta de la sesión extraordinaria N°4 del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 19/10/1995; firmado por el capitán de Corbeta AB Eduardo Román Sandoval, Secretario.
- 24.- Acta de la sesión N° 61 del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 08/11/1995; firmado por el capitán de Corbeta AB Eduardo Román Sandoval, Secretario.
- 25.- Acta de la sesión N° 62 del Consejo superior de los Astilleros y Maestranza de la Armada de fecha 20/11/1995; firmado por el capitán de Corbeta AB Eduardo Román Sandoval, Secretario.
- 26.- Carta de solicitud de pronunciamiento dirigida a la Contralor Regional Señora Verónica Orrego Ahumada por el Sindicato de trabajadores de ASMAR de Magallanes, de fecha 16/8/2011, firmada por el presidente de dicho sindicato Miguel Colpihueque S.
- 27.- Respuesta del Director de Astilleros y Maestranza de la Armada al señor Contralor General de la República de fecha 14/11/2011, firmado por el Contra Almirante Andrés Fonzo Morán, Director.
- 28.- Dictámenes de la Contraloría General de República: Asignación de zona:
- a.- N° 28.899 de 26 de octubre de 1989.
 - b.- N° 29.701 de 22-mayo 2012.
 - c.- N° 23.157 de 20 de abril de 2012, y,
 - d.- N° 45.073 de 28 de diciembre de 2017
- 29.- Procedimiento Administrativo 010-81/2 sobre sistema de remuneraciones para trabajadores ASMAR; y Listado Corporativo de Cargos en actual vigencia desde 01 de junio de 2015.
- 30.- Oficio D. ASMAR Ordinario N° 10300/44 de 20 de julio de 1989 mediante el cual ASMAR solicita a la Contraloría General de República un pronunciamiento respecto a la interpretación del DL 1282 del año 1975.
- 31.- Cuadro comparativo de Remuneraciones. Certificado de proyección de remuneraciones emitido con fecha 9/8/2018; firmado por el Jefe de Sección Remuneraciones de ASMAR de Talcahuano, doña Marina Silva Henríquez.
- 32.- Petitorio peticiones acuerdo nacional de los sindicatos de ASMAR del año 2013. (Punto N° 1 solicitan modificar sistema de remuneraciones y que se les reconozca "zona").
- 33.- Acta acuerdo final con sindicatos de ASMAR de 12 de diciembre de 2013.
- 34.- Anexo Contrato de Trabajo Jessica Gallardo Osses que comienza a regir el 1 de diciembre de 1995.



- 35.- Resolución N°120 del 22 noviembre de 1995 del Director de ASMAR que implementa acuerdos del Consejo Superior de ASMAR, relativa a nuevo sistema de remuneraciones.
- 36.- Instrucción N°1164 de 22 de noviembre de 1995 que dicta normas sobre nuevo sistema de remuneraciones de ASMAR.
- 37.- Resolución Ordinario de ASMAR N°10300/0300/902 de 12 de abril de 2018 sobre fijación de sueldos mínimos de acuerdo a nivel de competencia.
- 38.- Acta de Acuerdo de 12 de septiembre de 2006 entre Dirección de ASMAR y directivas de sindicatos de 3 plantas de ASMAR.
- 39.- Ordinario 85 año 2017 Dirección del Trabajo, sobre el órgano competente para interpretar normas del Código del Trabajo respecto de trabajadores de ASMAR.
- 40.- Ordinario N°5180/352 AÑO 2000 Dirección del Trabajo.
- 41.- Sentencia Tribunal Constitucional de fecha 18 enero 2017 rol 3283-2016.
- 42.- Memorándum N°10.300 de fecha 19 de marzo de 1993 de ASMAR.
- 43.- Copia de Contrato de Trabajo y anexo al mismo de los siguientes trabajadores: Adolfo Enrique aguayo Barra, Aliro Aguilera Castillo, Sergio Alejandro Alarcón Parra, Julio César Alegría Matus, Carlos Antonio Alfaro Farías, Ismael del Carmen Araya Pérez, Carlos Roberto Arias Arias, Carlos Amado Amagada Balboa, Luis Ricardo Arriagada Meller, Ricardo Ramón Avilés Muñoz, José del Carmen Bastías Espinoza, Juan Carlos Beltrán Sanhueza, Luis Humberto Bernal Yévenes, Jorge Fernando Brell Torres, Nazario Fernando Briceño Sanhueza, Juan Carlos Burboa Fierro, René Orlando Cruzat Pañalillo, Jorge Hernán Escobar Vega, Carlos Benito Fica Carrasco, Jorge Eduardo Fica Escobar, Bernarda del Carmen Freire Sanzana, Esteban Nicodemus Fuentealba Oreña, Patricio Osvaldo Garretón Suazo, Ventura Alberto González Hidalgo, Juan Carlos González Oliva, Eduardo Ornar González Silva, Reinaldo Santiago González Vergara, Luis Enrique Gutiérrez Pino, Ricardo Edison Gutiérrez Pino, Juan Hernán Henríquez Cruces, Pedro Amoldo Hernández Aedo, Jorge Homero Hernández Mansilla, Eduardo Enrique Hernández Román, Mauricio Leandro Hitzen Danyau, Oscar Aurelio Leal Rubilar, Rolando Vicente Lira Uribe, Edgardo Mauricio López Oportus, Luis Florentino López Sabalaga, Ricardo Antonio Medina Carrasco, Mario Alberto Montecinos Godoy, Patricio Antonio Mora Parra, Luis Adolfo Muñoz Barría, Luis Dante Muñoz Bello, José Ricardo Muñoz Monsalve, Gustavo Hernán Ochoa Hernández, Fabián Humberto Oñate Burdiles, Luis Humberto Ortega Villegas, Sergio Hernán Oses Zarate, Julio César Paredes González, Luis Román Parra Fuentes, Pablo Antonio Parra Ramírez, Javier Adolfo Pérez Castillo, Jorge Enrique Pino Durán, René Emilio



Ponce Fuentes, Luis Arturo Povea San Martín, José Rosendo Quezada Chamorro, Luis Iván Almonacid Gallardo, Heriberto Enrique Corral Chávez, Iván Marcos Cuevas Parra, Pedro Octavio Delgado Delgado, Víctor Hugo Delgado Sanhueza, José Miguel Díaz Campos, Carlos Esteban Díaz Jara, Jorge Eduardo Hidalgo Ramírez, Eduardo Nelson Meza Arraú, José Valentín Monjes Parra, Enrique Fernando Montecinos Durán, Armando Gerardo Montecinos González, Jorge Alfonso Olate Cáceres, José Roberto Quezada Chamorro.

44.- Contrato de trabajo de las siguientes personas: Humberto Abraham Acuña Salazar, Juan Antonio Aguilar Ramírez, Patricio Hernán Alarcón Suazo, Exequiel Santos Albarracín Méndez, Cristian Gonzalo Álvarez Contreras, John Sebastián Andrade Chamorro, Mario Humberto Arancibia Arriagada, Luis Osvaldo Araneda Tiznado, Moisés Isaac Aravena Morales, Miguez del Carmen Araya Rivas, Oscar

Arriagada Aravena, Cristian Fabián Arriagada Bustos, Daniel Edmundo Avendaño Aravena, César Iván Ávila Aravena, Máximo Moisés Barra Tapia, Ramón Alberto Bascur Navarrete, Alejandro Haroldo Bastías Sepúlveda, Hugo Sergio Belmar Navarrete, Mariano Belmar Navarrete, Víctor Javier Bilbao Burgos, José Mauricio Briceño Sanhueza, Pedro Alfonso Briceño Sanhueza, Juan Gastón Bulboa Aguayo, Patricio Moisés Burgos Espinoza, Juan Heraldó Bustos Bustos, Eduardo Alfredo Contreras Domínguez, Luis Aliey Córdova Jara, Robinson Iván Cruzat Pañalillo, Luis Humberto Cuevas Briones, Víctor Enrique Domínguez Sepúlveda, Pedro Mario Escobar Delgado, Henry Mauricio Espinoza Salamanca, Juan Forcael Carrasco, Ricardo Omar Fuentes Cáceres, Sady Marcel Gaete Nova, Gabriel Luis García Fierro; Marco Antonio Garrido Solís, José Omar González Vergara, Johnny Remberto Gutiérrez Pino, Amador Miguel Gutiérrez Sáez, Boris Guzmán Sanhueza, Carlos Eduardo Henríquez Cruces, Neftalí del Carmen Henríquez Montes, Enrique Segundo Hernández Silva, Hermes Merari Inostroza Valencia, Juan Andrés Jofré Navarrete, Cristian Osvaldo Lagos Palma, Braulio Alex Lavín Sepúlveda, Luis Alfonso Lazcano Cabrera, Cecilia Amalia López Aguilera, Mauricio Alfredo Maldonado Álvarez, Mario Moisés Monjes Parra, Eduardo Alexis Nova Morales, José Raúl Novoa Navarro, Juan Elías Novoa Navarro, Manuel Marcos Novoa Navarro, Luis Hernán Oliveros Alarcón, Sergio Alejandro Oñate Peña, José Aníbal Osses Zárate, Darío Adolfo Palma Rivas, Héctor Andrés Parra Pizani, Fernando Arturo Peña Silva, Iván David Pérez Anabalón, José A. Pincheira Cáceres, Abraham Jorge Pincheira Fuentes, José Luis Poblete Suazo, Martín Nolberto Ponce Parra, José Victorino Quiroz Santander.

45.- Copia de finiquito debidamente firmado ante ministro de fe, de los siguientes ex trabajadores de Asmar: José Genaro Sanzana Bravo, Alejandro



Orlando Sánchez Guzmán, Alexis Fabián Salgado Peñaloza, Oscar Rubén Peña Jiménez, Miguel Estaban Hernández Silva, Sergio Andrés Daviu Jara, Alejandro Andrés Cartes Miranda, Pedro Antonio Aguilera Villa, Robinson del Tránsito Valdebenito Fonseca, José Desiderio Ríos Sánchez, René Emilia Ponce Fuentes, Enrique Fernando Mortecinos Durán, Mauricio Andrés Henríquez Agurto, Ramón Alejandro Fierro Briones, Reinaldo Adolfo Espinoza Luna, Guillermo Eleuterio Carrera Martínez, José del Carmen Bastías Espinoza, Carlos Amado Arriagada Balboa, Oscar Mario Arriagada Aravena, de don Ismael del Carmen Araya Pérez y don Gianco Alexis Collarte Vásquez.

46.- Informe en derecho sobre la legalidad del pago de la asignación de zona de los funcionarios civiles de Asmar y la competencia interpretativa exclusiva de Contraloría General de la República en la materia, de 31 de diciembre de 2018, compuesto de 29 páginas, elaborado por el abogado Sr. Luis Cordero Vega, profesor de derecho administrativo, Doctor en Derecho y curriculum vitae del Profesor Cordero Vega.

-Testimonial:

Declararon en la audiencia de juicio bajo juramento o promesa de decir verdad los siguientes testigos:

- 1.- Marina Ester Silva Henríquez, cédula de identidad N° 12.553.664-6.
- 2.- Carlos Enrique Müller Zañartu, cédula de identidad N° 7.389.976-1.

Su declaración íntegra consta en la sesión del día 27 de octubre de 2021 de la audiencia de juicio.

-Oficios:

Se incorporaron mediante su lectura extractada los siguientes oficios:

- 1.- Dirección Regional del Trabajo de Concepción.
- 2.- Contraloría Regional de la República Concepción.
- 3.- Ministerio de Defensa Nacional.

-Causas traídas a la vista:

Pidió traer a la vista las siguientes procesos judiciales seguidos contra Asmar respecto de la misma pretensión:

- 1.- **Rit O-1333-2018**, del Juzgado del Trabajo de Concepción, y se tenga a la vista las siguientes piezas Sentencia Definitiva, el rechazo del recurso de nulidad respectivo y la inadmisibilidad de la unificación de la Corte Suprema.
- 2.- **O-784-2018**, del Juzgado del Trabajo de Concepción, y se tenga a la vista las siguientes piezas Sentencia que rechaza la demanda,



Sentencia de la Iltrma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechaza el recurso de nulidad y la declaración de inadmisibilidad de la Corte Suprema.

II.- EXCEPCION DE INCOMPETENCIA: RECHAZO

La parte demandada a objeto de enervar la acción deduce excepción de incompetencia absoluta respecto de la acción incoada por los demandantes en los términos ya relacionados en la parte expositiva del presente fallo.

Evacuado el traslado dado a los demandantes en la audiencia preparatoria, pide el rechazo de la excepción opuesta por cuanto este tribunal sería competente para conocer de esta controversia en los términos indicados en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo.

En opinión de este juez, la excepción será desestimada, por cuanto tal como se indica en la norma habilitante a que se hizo alusión, este juzgado del trabajo es plenamente competente conocer de la controversia de autos, por cuanto cumple la regla que contiene el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, ya que se trata precisamente de una controversia suscitada entre un empleador y los trabajadores representados por el sindicato demandante, respecto de la aplicación de normas laborales que dicen relación con las remuneraciones de esos trabajadores.

Por otro lado, la circunstancia que sea la Contraloría General de la República quien deba conocer de reclamaciones que se efectúen por los trabajadores civiles de Asmar en razón de su condición sui generis de empleados de una empresa estatal y en razón del marco normativo de su ley orgánica, no les puede impedir su derecho fundamental de acceso a la justicia y de buscar en última instancia un pronunciamiento jurisdiccional respecto de sus pretensiones, al tenor de lo prescrito en los artículos 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos con relación a los artículos 5° y 19 n°3 de la Constitución Política de la República. Así lo ha ido resolviendo en forma progresiva la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia.

Desde esta punto de vista, y muy especialmente en lo que dice relación al ámbito laboral, los trabajadores tienen derecho a que un tribunal imparcial que ejerce competencia en estas materias emita un pronunciamiento de fondo respecto de sus pretensiones, en el caso sub lite, el derecho que a su parecer le asiste de percibir ciertas prestaciones laborales, más allá de lo que en el ámbito de su competencia haya resuelto la Contraloría General de la República.

Por estas consideraciones es que se rechazará la excepción opuesta por la demandada en toda su extensión.



III.- FALTA DE LEGITIMIDAD: RECHAZO

1.- Legitimidad activa

La parte demandada ha alegado la falta de legitimidad activa del Sindicato para comparecer en representación de los trabajadores, la tenor de lo indicado en el capítulo I párrafo n° 2 de la parte expositiva del presente fallo, de conformidad a lo prescrito en el artículo 220 n°2 primera parte del Código del Trabajo.

No obstante lo anterior, la regla aplicable al caso sub lite es la de la segunda parte del citado artículo, por cuanto el Sindicato ha comparecido en autos reclamando la infracción de las normas relativas al pago de la asignación de zona que presuntamente le asiste a sus representados.

Se alega una presunta infracción a las leyes que regulan la materia y afecta a la totalidad de los afiliados, y es el caso que regula precisamente la norma en comento, pues dice que no será necesario el requerimiento cuando estas infracciones afecten a la generalidad de sus socios.

Y consta en los documentos acompañados consistente en certificado de vigencia del Sindicato y listado de afiliados, que la Directiva que ha comparecido tiene la facultad de hacerlo en los términos indicados en el artículo 220 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones es que la alegación de falta de legitimidad activa debe ser necesariamente desestimada.

2.- Legitimidad pasiva

La parte demandada también alega la falta de legitimidad pasiva a su respecto, en los términos indicados en la parte expositiva, los que se dan por reproducidos en este apartado.

El argumento sustancial para hacer esta alegación dice relación con que Asmar al haber actuado en la forma que se reprocha por la demandada se habría limitado a cumplir los dictámenes de la Contraloría General de la República y por ende sería el ente fiscalizador el que debiera haber sido demandado en estos autos.

Lo cierto es que la pretensión de la demandada carece de toda lógica, por cuanto lo que está pidiendo el sindicato es que el tribunal declare que sus afiliados tendría derecho a percibir la asignación de zona que se pagaba en sus remuneraciones hasta noviembre de 1995, y por ende, más allá del pronunciamiento administrativo de la Contraloría, es una exigencia que debe hacerse a quien es obligado al pago de la prestación, que es precisamente la demandada de autos.

Por estas consideraciones es que también debe ser desestimada la alegación de falta de legitimidad pasiva hecha por la parte demandada a su respecto.



IV.- EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE NULIDAD: RECHAZO

La demandada también ha opuesto la excepción de prescripción respecto de una presunta acción de nulidad impetrada por los demandantes.

Lo cierto es que no se incoado la acción de nulidad pretendida por la demandada, de tal forma que esta alegación debe ser necesariamente desestimada.

V.- EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN RELATIVA A LA ACCION DE COBRO DE LA ASIGNACIÓN RECLAMADA

La parte demandada ha opuesto la excepción de prescripción conforme lo prescrito en el artículo 510 del Código del Trabajo, según lo expuesto en la parte expositiva de este fallo.

Alegación que la parte demandada solicitó rechazar por los argumentos expuestos en forma oral en la audiencia preparatoria.

Al respecto, hay que señalar que la acción incoada por los demandantes es una de carácter declarativa, pues persigue que el tribunal establezca que los trabajadores civiles de Asmar tienen derecho a percibir la asignación de zona conforme la normativa legal que fundamenta su pretensión. Desde esta perspectiva, la acción incoada no está sujeta a los plazos de prescripción del artículo 510 del Código del Trabajo.

Otra cosa distinta es el cobro de la asignación una vez que se haya establecido el derecho, la que por cierto debe quedar sujeta a los plazos de prescripción conforme las reglas generales.

De tal modo, la excepción opuesta debe ser necesariamente desestimada en la forma entablada por la demandada.

VI.- EN CUANTO AL PODER LIBERATORIO DEL FINIQUITO:

Sin perjuicio de lo que se dirá respecto de la cuestión de fondo, hay que señalar desde ya, como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de las diversa Cortes de Apelaciones y la Sala Laboral de la Excelentísima Corte Suprema, el finiquito es una convención y por tanto obliga a lo expresamente pactado y produce el efecto de una transacción, es decir excepción de cosa juzgada, respecto de lo que las partes hayan convenido expresamente en dicho finiquito, que por regla general dice relación con prestaciones con ocasión del término de la relación laboral, tales como indemnizaciones por años de servicios, pre aviso, etc. Pero no obligan respecto de aquellas cosas que no figuran en tal documento y por ende no



producirían a su respecto el poder liberatorio del artículo 177 del Código del Trabajo.

De allí, que la excepción de finiquito opuesta por la demandada no puede prosperar, por cuanto del tenor de los documentos tenidos a la vista no es posible concluir que se haya pacata algo con respecto a la controversia de autos.

Además, esta excepción debe ser resuelta en una controversia en la que sean parte los que figuran en el citado finiquito, es decir el empleador y el respectivo trabajador, careciendo de legitimidad pasiva el sindicato compareciente pues excedería el marco del requerimiento hecho valer en su oportunidad.

Por estas consideraciones es que la alegación de la demandada en orden a resolver la presente excepción, debe ser desestimada en todas sus partes.

VII.- EN CUANTO AL FONDO

1.- Objeto del juicio

Acorde los antecedentes expuestos por las partes en los escritos fundamentales, se desprende con meridiana claridad que el objeto de esta litis esta en determinar si a los demandantes les asiste o no el derecho a percibir asignación de zona conforme lo regulado en el Decreto N° 658 de fecha 10 de diciembre de 1966.

Para tal efecto, el Sindicato demandante sostiene que se trataría de una norma vigente, que al establecer un derecho de carácter laboral, este resultaría irrenunciable y que por ende aún les asiste el derecho a percibirla, no obstante los anexos de contratos suscritos por los trabajadores en su oportunidad.

Pretensión que es resistida por la parte demandada, señalando que la Ley 18.296 de fecha 7 de febrero de 1984, Ley Orgánica Constitucional de Astilleros y Maestranza de la Armada, desde el momento de su entrada en vigencia habría derogado toda otra norma anterior dentro de las cuales se encontraría precisamente el Decreto 658/1966.

A lo anterior se suma una serie de otras alegaciones secundarias que apuntan a sostener su resistencia, en los términos ya reseñados en la parte expositiva de este fallo.

2.- Hechos asentados en el procedimiento

Acorde la prueba rendida en audiencia de juicio por las partes, han quedado sentados los siguientes hechos:



1.- El sindicato demandante agrupa a trabajadores civiles de la demandada, los que para los efectos laborales se rigen por las normas del sector privado.

2.- La demandada Astilleros y Maestranza de la Armada constituyen una persona jurídica de derecho público, de administración autónoma y de patrimonio propio, en conformidad a lo dispuesto a su ley orgánica, la 18.296 de 7 de febrero de 1984.

3.- Los trabajadores civiles de la demandada, hasta noviembre del año 1995 percibían una serie de asignaciones que conformaban su remuneración, entre ellas la denominada asignación de zona, que en el caso de los trabajadores demandantes ascendía a un 20% de su sueldo base.

4.- A partir de la fecha anterior, dejan de percibir la citada asignación, entre otras, por disposición del Consejo Superior de Asmar que reestructura el sistema de remuneraciones de los trabajadores civiles de Asmar.

5.- Los trabajadores suscribieron un anexo de contrato de trabajo en el cual se consignó la nueva modalidad de pago de las remuneraciones.

6.- Los trabajadores civiles de Asmar a través de sus diversos sindicatos han presentado a la Contraloría General de la República solicitudes para los efectos de determinar si la demandada está o no obligada al pago de la asignación de zona en los términos indicados en la demanda.

7.- La contraloría General de la República mediante diversos dictámenes se ha pronunciado en forma invariable sosteniendo que los trabajadores no tienen derecho a percibir tal asignación.

Lo anterior según consta en la prueba documental rendida en el juicio por ambas partes, consistente en actas del Consejo Superior de Asmar, copia de los anexos de contrato de trabajo suscritos por los trabajadores de Asmar, las liquidaciones de remuneraciones, copia de los Dictámenes de la Contraloría General de la República.

De igual forma, la testimonial de ambas partes dio cuenta de este proceso de transformación de las remuneraciones de los trabajadores civiles de Asmar, con las diferencias obvias en relación a sus pretensiones y defensas, pero en lo medular están contestes en que hubo este proceso de reestructuración y la asignación de zona junto a otras que se pagaban se refundieron en el sueldo base de los trabajadores, y como tal, no siguió figurando en las remuneraciones de aquellos, pese a que el formulario de liquidación de sueldos la siguió consignando pero esta estaba en blanco.



3.- Naturaleza de la asignación de zona¹

Hay que tener presente que la asignación de zona es un estipendio otorgado mensualmente a los funcionarios del Sector Público para el desempeño de un empleo en el que se ven obligados a residir en una provincia o territorio que reúne condiciones especiales derivadas de su aislamiento o del costo de vida.

En su determinación actual está estipulada en los artículos 5° y 7° del Decreto Ley N° 249 de 1973. No obstante existir cuerpos legales anteriores que ya la estipulaban, para ciertos empedados del sector público, lo que se vino a unificar en cuanto a establecer una escala única de remuneraciones para el sector público en los términos regulados en el decreto ley aludido.

La asignación es aplicable a los funcionarios regidos por el DL N° 249, así como por aquellos regidos por otros cuerpos legales, pero que a su vez hacen referencia al Decreto Ley N° 249 para señalar que les será aplicable la asignación de zona. El DL N° 249 rige para los funcionarios bajo la Escala Única de Sueldos, pero los artículos 7° y 25 del DL N° 3.551 de 1981 indican que la asignación también aplica para funcionarios fiscalizadores y municipales, correspondientemente. Por otra parte, el artículo 26° de la Ley N° 19.378 de 1995, así como el artículo 11° del texto refundido de la Ley N° 15.076 (DFL 1 del 20-11-2001) establecen que los funcionarios que se desempeñen en los establecimientos municipales de atención primaria de salud o en las entidades administradoras de salud municipal, así como los profesionales de la salud que se desempeñen en Servicios de Salud, Servicios de la Administración Pública, empresas fiscales e instituciones semifiscales o autónomas, también les corresponde el derecho a percibir tal asignación.

Posteriormente, los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley N° 19.354 de 1994 estipularon que, para los funcionarios afectos a la Escala Única de Sueldos, fiscalizadores y municipales, los porcentajes de asignación de zona se calcularán sobre el sueldo base de la escala de remuneraciones, aumentado el monto resultante en un 40%. Por tanto, los funcionarios de la salud primaria municipal perciben la asignación de zona, pero no el complemento del 40% por no estar incluidos en la Ley N° 19.354. Por su parte, el artículo 45 de la Ley N° 19.664 del año 2000, señala que a los profesionales de la salud la asignación de zona se les calcula sobre el sueldo base, la asignación de antigüedad y la asignación de experiencia calificada, cuando correspondan. De forma similar a los funcionarios de la salud municipal, a los profesionales de la salud no les corresponde el

¹ Lo expuesto en este párrafo se obtuvo del documento denominado "Asignación de zona para funcionarios del Sector Público en localidades de Zonas Extremas", cuyo autor es don Rafael Hernández. Obtenido en <https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26177/1/SUP117912.pdf>; visitado el 26 de noviembre de 2021.



complemento del 40% por estar explícitamente excluidos de ello en el artículo 1° de la Ley N° 19.354.

Respecto a las Fuerzas Armadas, el Art. 185, literal c), del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1997 que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, señala que el personal afecto a dicho estatuto tiene derecho a percibir asignación de zona, no imponible, en conformidad a las normas que rigen al personal de la Administración Civil del Estado. Al no estar afectos al DL N° 249, su asignación de zona no se calcula sobre el sueldo base sino que sobre el total de las remuneraciones, salvo las siguientes asignaciones, gratificaciones y bonificaciones: asignación de rancho; asignación familiar; asignación de especialidad al grado efectivo; gratificación de servicios en las unidades de paracaidistas, de montaña, comandos y fuerzas especiales; bonificación de riesgo y bonificación especial.

En lo referente al Poder Judicial, el Art. 7° del DL 3.058 de 1979 establece que el personal del Poder Judicial mantendrá el derecho a percibir asignación de zona. Por su parte, el Art. 2° de la Ley N° 19.133 de 1992 indica que la asignación de zona se calculará para el personal del Poder Judicial sobre el sueldo base de su escala de sueldos y sobre la respectiva asignación de antigüedad, aumentado el monto resultante en un ciento por ciento.

Es posible observar que hay trabajadores de distintos regímenes, a los que no les es aplicable la asignación de zona. Por ejemplo, el artículo 4° de la Ley N° 19.464 de 1996 señala que los asistentes de la educación son trabajadores regidos por el Código del Trabajo; al no tener un cargo de planta o contrata, no les corresponde la asignación de zona del Art. 7° del DL 249 de 19735.

Respecto a los funcionarios de las universidades estatales, el artículo 1° del DFL N° 3 de 1980, Ministerio de Educación, establece que las remuneraciones del personal de las universidades serán fijadas de acuerdo a las normas orgánicas de cada una de ellas.

4.- Asignación de zona para los trabajadores de Asmar

Por su parte, el Decreto N° 658 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina de fecha 10 de diciembre de 1966, establece normas para el pago de remuneraciones y otros beneficios de que gozará el personal que labora en los Astilleros y Maestranzas de la Armada-Asmar, dispone desde ya en su artículo 1° que las remuneraciones de los “empleados y obreros” (debe entenderse personal civil) se rigen por las normas que para tal efecto dispone el Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias.



Por su parte el artículo sexto del citado cuerpo legal dispone que “el personal de empleados y obreros contratados por la Empresa que se desempeñe en las Plantas Industriales de Talcahuano y Magallanes, recibirá la gratificación de zona establecida en el Estatuto Administrativo que se fijará por medio de un porcentaje calculado sobre el sueldo o salario base que se haya estipulado en su respectivo contrato de trabajo.

Este decreto establece también una serie de otras asignaciones para el citado personal y su fórmula de cálculo.

Acorde lo anterior y según los antecedentes fácticos acompañados al proceso por las partes, el personal civil de la Armada, entre ellos, los afiliados al sindicato demandante, percibieron esta asignación hasta el mes de noviembre de 1994, fecha en la cual el Consejo Superior de la entidad demandada determina una nueva estructura de remuneraciones, que excluye la referida asignación, al fusionarla con otras asignaciones al sueldo base.

Cabe señalar que a la fecha de la dictación del referido decreto Asmar se regía por el DFL N°321/1960 del Ministerio de Hacienda que crea a los Astilleros de la Armada.

5.- Nueva ley orgánica de Asmar y sus efectos

Ya se dijo que la creación de Asmar se produjo con el DFL 321/1960, el que fue derogado por la ley 18.296 de 07 de febrero de 1984, que constituye su actual ley orgánica.

Esta norma contiene 4 títulos y una única disposición transitoria. El título primero, relativo al objeto, establece la naturaleza de la institución (artículo 1°); las funciones que desempeña (artículo 2°) y la dependencia con el Gobierno a través del Ministerio de defensa Nacional, Subsecretaría de Marina (artículo 3°).

El título segundo, relativo a la organización, artículos 4° a 19. El tercero relativo a los recursos de que dispone, artículos 20 a 26, y finalmente el título cuarto relativo a disposiciones generales.

En cuanto a la estructura organizacional, el artículo 9° dispone que la entidad tendrá “un Consejo Superior, encargado de supervigilar sus actividades, el cual estará compuesto por los siguientes miembros...”.

El artículo 13, relativo a las funciones del citado Consejo, en su numeral 15 establece como atribuciones del Consejo, entre otras, “aprobar la planta y fijar las remuneraciones del personal civil contratado por ASMAR”.

Por su parte el artículo 31 dispone que “ASMAR se regirá por esta ley, su Reglamento Orgánico que dictará el Presidente de la República a proposición del Comandante en Jefe de la Armada y las disposiciones



generales que apruebe el Consejo Superior, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, N° 10, de esta ley”.

Luego, en su artículo 33 prescribe “derogase el decreto con fuerza de ley N°321, de 1960, en su texto fijado por decreto N° 353, de Marina, de 1977, y sus modificaciones, y toda otra norma legal o reglamentaria que sea contraria a lo dispuesto en esta ley...”

Tal como se aprecia en la estructura de la norma citada, sus diversos títulos y la lógica de la misma, se puede concluir sin mayores ambages, que esta nueva ley vino a regular en forma íntegra a la citada institución, estableciendo una regulación única en cuanto a su estructura y funcionamiento.

Lo anterior se puede corroborar con lo señalado en el mensaje del proyecto, presentando al entonces órgano legislativo de facto que existía en el país, la Junta de Gobierno, conformada por los Comandantes en Jefes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Allí se lee que el citado proyecto de ley tenía por finalidad reemplazar el ordenamiento vigente, considerando que la legislación original había sufrido un gran número de modificaciones, en virtud de ello se estimó necesario dictar un nuevo estatuto orgánico para Asmar.

También se puede constatar dicho propósito en el informe al proyecto de ley orgánica de Asmar, de fecha 19 de diciembre de 1983, elaborado por el secretario de legislación de la Junta de Gobierno, y siguientes, informe que en concreto señala que este proyecto tiene como objetivo establecer una nueva ley orgánica para Asmar, en reemplazo de la actual, contenida en el Decreto con Fuerza de Ley N° 321/1960.

Es más, la misma ley refleja este espíritu en sus artículos 31 y 32; prescribe el primero que “ASMAR se regirá por esta ley, su Reglamento Orgánico que dictará el Presidente de la República a proposición del Comandante en Jefe de la Armada y las disposiciones generales que apruebe el Consejo Superior, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, N° 10, de esta ley”.

Por su parte el artículo 33 consigna la norma de cierre y deroga expresamente el DFL 321 y ***toda otra norma legal o reglamentaria que sea contraria a lo dispuesto en esta ley.***

6.- Derogación tácita del decreto 658

Que, en consecuencia, acorde lo expresado en el párrafo precedente, no cabe duda que el propósito de la ley citada fue establecer una nueva regulación para Asmar, lo que vino a producir lo que en doctrina se conoce como derogación tácita de aquellas otras normas que se aplicaban a la



entidad y que sean incompatible con las disposiciones de la nueva normativa.

Sabemos que la derogación consiste en dejar sin vigencia una norma por otra posterior que cuenta con la misma legitimidad y validez que la anterior. Determina el cese de pertenencia de una norma o parte de ella a un ordenamiento jurídico y la cancelación de la vigencia de una norma jurídica.

La derogación se puede dar de distintas formas, de manera expresa cuando una nueva ley dice expresamente que deroga una anterior, de forma tácita cuando una nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley primitiva de manera orgánica.

En el caso sub lite, se puede constatar la concurrencia de ambas formas de derogación, pues el artículo 33 de la Ley 18. 296 dispuso expresamente la derogación del DFL N°321/1960, mediante la cual se creó la referida entidad, pero además señala que se deroga también “toda otra norma legal o reglamentaria que sea contraria a lo dispuesto en esta ley”, que cabe dentro del concepto de derogación tácita de tipo orgánica.

Debemos señalar que derogación orgánica es una especie de derogación tácita que se produce cuando una materia regulada por una o varias leyes, posteriormente es regulada de nuevo y en forma completa por otra ley, aunque no exista incompatibilidad entre las disposiciones de la ley o leyes primitivas y las de la nueva.

Al respecto, en doctrina se entiende que la derogación orgánica “Es la que se produce cuando una ley disciplina toda la materia regulada por una o varias leyes precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de éstas y las de la ley nueva. Si el legislador ha reordenado toda la materia, es forzoso suponer que ha partido de otros principios directivos, los cuales, en sus variadas y posibles aplicaciones, podrían llevar a consecuencias diversas y aun opuestas a las que se pretenden si se introdujera un precepto de la ley antigua, aunque no fuera incompatible con las normas de la nueva ley. Para que esta derogación tenga lugar, es menester que la nueva ley reglamente en forma completa una materia o un organismo dado. El determinar si una materia está o no enteramente regulada por la nueva ley, depende, no del mayor o menor número de disposiciones que contiene la ley nueva con relación a la antigua, sino de la intención revelada por el legislador de abarcar con las nuevas disposiciones toda una materia, aun en el supuesto, muy improbable, de una disposición única.”²

En el mismo sentido, otro autor indica que “la derogación orgánica se caracteriza por la pérdida en vigor de una ley por la entrada en vigencia de

² Alessandri R., Arturo; Somarriva R., Manuel; Vodanovic H., Antonio: “Tratado de Derecho Civil”; Editorial Jurídica de Chile, Primera Edición, año 1998; páginas 205 y 206.



una nueva ley que pretende regular de manera completa y orgánica la materia de la ley antigua. En realidad, es una forma de derogación tácita que tiene como característica que es total, es decir, que derogaría incluso las disposiciones que en estricto rigor no serían incompatibles con las de la nueva ley”³

Dado el análisis precedente, no cabe duda que la situación planteada se encuadra en la pretensión del Sindicato compareciente se enmarca dentro de la doctrina ya citada, pues consta en el propio texto de la ley 18296, en sus artículos 1°, 2°, 31 y 33, y todos los del Título II, así como en el mensaje de la misma, que esta tuvo por finalidad regular toda la materia relativa Asmar que se encontraba dispersa en diversas normas jurídicas, quedando en evidencia expresa la intención del legislador de abarcar con las nuevas disposiciones toda la materia referida a la entidad.

En este contexto, resulta irrelevante la circunstancia que el Decreto 658 sea compatible o no con el artículo 13 N° 15 de la citada ley en cuanto establece como atribuciones del Consejo Superior de ASMAR: Aprobar la planta y fijar las remuneraciones del personal civil contratado por ASMAR.

Por lo demás, el Decreto 658 tenía como fundamento de su dictación el Decreto con Fuerza de Ley N° 321, esto es, la antigua ley de Asmar, que fue expresamente derogada por la ley 18.296 en su artículo 33, por lo que tratándose de una norma accesorio, debe seguir la suerte de la principal.

Así, la ley en comento crea una nueva orgánica para el funcionamiento de la entidad, como lo es el Consejo Superior de Asmar, integrado por las personas que indica el artículo 9°, como ya se ha expresado y con facultades suficientes para “...aprobar la planta y **fijar las remuneraciones** del personal civil contratado por ASMAR”, como se consigna en el numeral 15 del artículo 13 de la referida ley. Y el decreto 658/1966 se refería precisamente a las remuneraciones del personal civil de Asmar, y establecía la existencia de un salario base y la forma como éste se devengaba y el conjunto de otras asignaciones que se le reconocían a este personal, entre otras, el bono trimestral y la que se denomina “gratificación de zona”, y la forma de cálculo de las mismas. Es más, el decreto 321/1973 con posterioridad modifica el devengo y forma de cálculo de la asignación de zona, de tal forma que el citado Decreto ya a esa fecha no tenía plena vigencia en lo que a la asignación de zona se refería.

Es más, llama la atención que los demandantes sólo aleguen la pérdida de la asignación de zona y no otras asignaciones o prestaciones que se imputaron con posterioridad al sueldo base por parte del Consejo

³ Corral T, Hernán: “Curso de Derecho Civil – Parte General”, Editorial Thomson Reuters, año 2018; p. 96.



Superior, tal es el caso, del bono trimestral, que actualmente tampoco es percibido por este grupo de trabajadores.

Desde esta perspectiva, no sería efectivo el razonamiento de los demandantes, en orden a que en la referida ley orgánica no se le entregarían facultades al Consejo Superior para modificar la estructura remunerativa de los trabajadores civiles de Asmar, por cuanto expresamente la norma lo señala, “fijar las remuneraciones”, es decir, establecer la estructura remunerativa de los trabajadores sujetos a este estatuto.

En consecuencia, la actuación del Consejo expresado en el Acta N° Según consta de Acta Sesión Ordinaria N° 62 de fecha 20 de noviembre de 1.995 y del Director manifestada en la Resolución N° 120 de 1.995, mediante la cual se aprueba el Nuevo Sistema de Remuneraciones para los empleados civiles de Asmar, no da cuenta más que el ejercicio de una facultad entregada en la Ley al referido órgano y que se condice además, con los anexos de contrato de trabajo suscritos por los trabajadores de Asmar mediante los cuales convienen en aceptar su nueva estructura remuneracional, sin que se haya rendido prueba sustancial que dé cuenta que éstos hayan sido compelidos a suscribir dicho anexo de contrato, más aún cuando a la época de suscripción del mismo ya el país estaba en plena democracia y funcionando a pleno las instituciones del estado de derecho, pudiendo en consecuencia manifestar su discordancia con la citada decisión.

Por estas consideraciones es que la demanda debe ser desestimada en todas sus partes, por cuanto lo alegado por los demandantes no se condice con la estructura normativa vigente, pues se ampara en una norma que se encuentra tácitamente derogada.

VIII.- OTRAS ALEGACIONES DE LOS DEMANDANTES

1.- Derecho irrenunciable

En lo que respecta a la alegación de la demandante relativa a que en el Decreto 658 se contenía un derecho laboral y como tal este derecho resultaba ser irrenunciable e inderogable y por lo mismo se mantendría vigente, invocando para ello el principio indubio pro operario, en su variante de condición más beneficiosa.

De partida esta argumentación con el análisis efectuado en el párrafo precedente, ya que dicha norma estaría tácitamente derogada por causal sobreviniente al haber sido dictada la ley 18.296 que regula en forma orgánica e íntegra el funcionamiento de Asmar, concentrando en una sola norma las contenidas en normas dispersas y estableciendo además una nueva orgánica de funcionamiento para la institución.



Cabe señalar además, que no es lo mismo el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales contenido en el artículo 5° del Código del Trabajo, con la inderogabilidad de las normas. El Código en ningún caso establece que los “derechos laborales son inderogables”. Pues una nueva ley, por irrenunciable que sean los derechos establecidos en las normas laborales, pues establecer nuevos derechos o bien quitar otros, salvo que ellos sean derechos fundamentales, cuyo no es el caso de autos. Y hay ejemplos variados de tales derogaciones especialmente en la legislación laboral, que es muy dinámica en relación a los vaivenes de la acción política, aunque ello nos merezca reproche dado que los citados derechos son reivindicaciones históricas del movimiento sindical a nivel internacional. Un ejemplo palmario lo es la disminución de la indemnización por años de servicios que de una sin tope en años de servicios pasó a ser una con un tope legal de 11 años, sin perjuicio de los pactos laborales entre empleador y trabajador y/o entidad sindical logren establecer en orden a otorgar una indemnización sin tope alguno.

Además, hay que señalar que la institución de irrenunciabilidad de los derechos obliga al empleador en el contexto del contrato de trabajo, individual o colectivo, y siempre cuando éste se encuentre vigente, y por ende no limita o inhibe al legislador, que es precisamente el espacio en el cual se habla de derogación en sus diversos modos.

Por otro lado, de acuerdo al mérito de la prueba testimonial de la propia demandante, consistente en la declaración de los testigos Manuel Tornel Oliveros, Edgardo Mauricio López Oportuz, Mikel Capetillo Cárdenas y Paula Andrea del Pino Gesele, como de las liquidaciones de sueldo acompañadas como prueba documental, se desprende que la remuneración de los trabajadores de Asmar comprendían el pago de un sueldo base y un conjunto de asignaciones, tales como los trienios, las asignaciones de zona, entre otras, y luego desde noviembre de 1995 en adelante dichas asignaciones se agruparon en un solo ítem, el que fue definido como sueldo base.

Acorde lo anterior en el concepto sueldo base se encontraban incorporadas las asignaciones de zona y trienios, entre otras asignaciones.

Por lo demás, de los dichos de estos mismos testigos se desprende que el sueldo siguió siendo el mismo, antes y después de esta modificación y que no vieron disminuidos sus remuneraciones.

Es decir, se trataría de una asignación que se continúa pagando, pues se encuentra dentro del actual sueldo base, no se trata entonces de una asignación que se hubiese dejado de pagar, sino que se agruparon todas las asignaciones percibidas, a excepción de las indicadas en el Acta



del Consejo Superior a que se ha hecho alusión, y se denominaron de una sola forma, esto es, sueldo base.

Aquello también se pudo corroborar con la testimonial rendida por la demandada, especialmente la declaración de doña Marina Ester Silva Henríquez quien expuso latamente en la audiencia de juicio el mecanismo que operó para el cambio del sistema de remuneraciones de los trabajadores de Asmar, indicando que el total de las asignaciones pagadas a los trabajadores se sumaron al sueldo base, de tal forma que no se produjo la disminución de aquellas sino que su valor nominal se agregó al sueldo base y se siguió pagando de esa forma, no produciéndose menoscabo en cuanto al valor total de las mismas. Esta misma testigo evacuó un informe que da cuenta de lo expuesto por ella en la audiencia de juicio y que corrobora sus dichos en orden a que los trabajadores no habrían perjuicio patrimonial en sus remuneraciones que seguían teniendo el mismo valor antes y después de la restructuración practicada por el Director en cumplimiento del mandato del Consejo Superior.

Lo anterior se condice con la Resolución N°120 de fecha 22 de noviembre de 2015 de Asmar y la Instrucción N°1164 de 22 de noviembre de 1995, del Director de Asmar que establecen el nuevo sistema de remuneraciones de los trabajadores civiles de la citada entidad.

A la misma conclusión se puede arribar al revisar la prueba documental acompañada por ambas partes consistente en anexos de contrato de trabajo de noviembre 1995, en los cuales se indica lo siguiente:

En la cláusula primera se lee “Las partes declaran que de acuerdo al Contrato de Trabajo vigente, Asmar remunera (al trabajador en cuestión), con la suma total que se indica, la que está compuesta por un sueldo base más todas o algunas de las siguientes asignaciones y bonificaciones: trienios, zona, vivienda, rol directivo profesional, cargo, profesional ejecutivo, ventas, compensatoria, compensatoria de salud y capacidad técnica.

En la cláusula segunda se indica: “por el presente instrumento y en este acto las partes acuerdan que el sueldo del trabajador y los demás beneficios remuneratorios que percibe se refunden en un solo sueldo, excepto el bono de productividad que se pagará cada vez que se cumplan los requisitos para percibirlo”.

La misma cláusula indica a continuación que “el trabajador declara, reconoce y acepta que la modificación introducida a su sistemas de remuneraciones no significación disminución o detrimento alguno respecto de la cantidad mensual que actualmente percibe”.



Por último, en este párrafo cabe señalar que la normativa reglamentaria aludida se encuentra en concordancia con lo prescrito en el artículo 18 inciso segundo de la ley 18.296, que dispone expresamente que “este personal –civil– se registrará, en lo laboral y previsional, por las disposiciones aplicables a los trabajadores del sector privado”. Y es de público conocimiento que este tipo de asignaciones no se pagan en el sector privado, salvo las estipulaciones contractuales que pacten las partes ya sea individual o colectivamente.

En consecuencia, de lo expuesto precedentemente, no es que la asignación de zona (gratificación de zona como se menciona en el Decreto 658) se haya eliminado, pues esta se continúa pagando, solo que su importe se realiza mediante el ítem sueldo base, pues en este ítem se fundieron todas las asignaciones percibidas hasta noviembre de 1995 por el personal civil de Asmar.

2.- Acto discriminatorio

La parte demandante a su vez señaló que la actuación de la demandada constituiría un acto discriminatorio respecto del personal civil de la Armada con relación al personal militar que trabaja en los Astilleros, quienes sí perciben tal asignación.

Sin perjuicio que dicha alegación no está enmarcada en una acción propiamente, pues este procedimiento no es de tutela sino que uno de aplicación general, corresponde hacerse cargo de esta alegación en los términos que se indicará.

A juicio de este sentenciador, lo anterior no sería efectivo, pues como ya se ha señalado, esta asignación de zona se sigue percibiendo por el personal civil, en virtud de la modificación que se hizo al Contrato de Trabajo, en donde se refundieron en un solo ítem los distintos conceptos percibidos por los trabajadores, dentro de los que se incorporó la asignación de zona.

Y por lo demás, el personal militar asignado a Astilleros sigue percibiendo su sueldo en calidad de uniformado, y como tal, resulta ser un funcionario público que se rige para tal efecto por Escala Única de Sueldos del Sector Público y tal calidad es beneficiario de la asignación de zona no percibiendo remuneración adicional por su desempeño en Asmar, conforme lo prescribe el artículo 17 de la ley 18.296.

3.- Actos propios

Los demandantes también han señalado a objeto de fundamentar su pretensión que el derecho que les asiste o cobrar asignación de zona se desprendería además de la propia actuación de la demandada, por cuanto



no obstante la dictación de la nueva ley orgánica del año 1984, en la que se afina para sostener que el Decreto 658 se encontraría derogado a su respecto, siguió pagando tal asignación a los trabajadores hasta noviembre del año 1995.

No obstante lo anterior, y tal como se ha señalado precedentemente, no es que la demandada haya eliminado tal asignación y haya dejado de pagar su importe a los trabajadores, sino que su valor nominal se refunde junto a otras asignaciones y prestaciones en un único sueldo base, de tal forma que la pretensión de los demandantes no es aplicable al caso sub lite.

Y por último, las adecuaciones en el sistema remuneracional del personal civil no estaban exigidas cumplir dentro de un plazo perentorio, de manera tal que no es que la demandada esté desconociendo su propia actuación, sino que en el ejercicio de las facultades otorgadas a sus órganos, adecuó la estructura de remuneraciones del personal civil que labora en ella para hacerla coherente con el sistema existente en el sector privado.

Dado lo anterior no será oída la alegación de la demandada en lo que a este planteamiento se refiere.

IX.- VALORACION DE LA PRUEBA

La prueba ha sido valorada conforme a las reglas de la sana crítica al tenor de lo prescrito en el artículo 356 del Código del Trabajo.

La que no ha sido expresamente analizada en el presente fallo no altera lo ya razonado en esta sentencia.

Así, el informe pericial contable incorporado en la audiencia de juicio por la demandante no resulta idóneo para desvirtuar los razonamientos precedentes, por cuanto él se sustenta en la tesis de la parte demandante que resultó contraria a las convicciones que adquirió este sentenciador, siendo más bien coherente con un escenario de condena por cuanto apunta a establecer montos por una supuesta deuda por concepto de asignación de zona.

En cuanto al Informe en Derecho que se incorporó por la demandante, consistente en uno que fuera evacuado por el abogado Pablo Ruiz Tagle en la causa traída a la vista no resulta suficiente para alterar los razonamientos precedentes que se sustentan en la demás prueba rendida por las partes.

En cuanto al informe pericial del abogado Luis Cordero, que apunta a la competencia de la Contraloría General en materia de interpretación de la asignación de zona, ello no obsta al derecho que le asiste a los



demandantes de requerir un pronunciamiento judicial respecto de su pretensión, como ya se ha analizado en el párrafo pertinente.

En cuanto a los apercibimientos solicitados, dado la naturaleza de la controversia resultan inoficiosos, y por ende no corresponde acogerlos, más aún cuando la parte demandada ha dado razones suficientes para justificar la imposibilidad de exhibir los documentos al tenor de lo prescrito en el artículo 453 n°5 del Código del Trabajo.

En cuanto a la prueba de absolución de posiciones, consistente en la declaración de Sergio Raccoursier Núñez por la demandada no obtuvo una confesión favorable a sus pretensiones, y el reconocimiento que hace respecto del cambio en la estructura remuneracional de los empleados civiles de Asmar se enmarca dentro de lo ya analizado en este fallo en los términos expuestos en el capítulo VI del presente fallo.

En lo que respecta a la prueba documental de los demandantes esta ha sido valorada en los términos ya indicados en los párrafos precedentes, sin que haya alterado la convicción a la que se ha arribado en este fallo. En lo que respecta a las liquidaciones de sueldo que contienen la glosa “asignación de zona” y que a partir de diciembre de 1995 aparece sin cifra nominal de dinero, no es prueba suficiente que los actores tengan derecho a percibir esta asignación, y sólo da cuenta que el formulario utilizado contempla esta glosa vacía, pues dicha asignación se habría refundido junto a otras en el sueldo base.

En cuanto al

X.- DECISION

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 5°, y 446 a 462 del Código del Trabajo; 18 de la Ley 18.296, 2° transitorio del DL 3.500 y 2° transitorio de la ley 18.458, demás normas citadas, se resuelve:

I).- Que, **SE RECHAZAN** las excepciones de falta de legitimidad activa y pasiva, de prescripción y de finiquito opuestas por la demanda a objeto de enervar la acción de los demandantes, en todas sus partes, sin costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

II).- Que, **SE RECHAZA** la demanda interpuesta por el **SINDICATO DE TRABAJADORES DE ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA, ASMAR TALCAHUANO** representado por su directiva sindical don **Cristian Alexis Novas Placencia**, doña **Paula Andrea del Pino Gecele**, don **Cristhian Osvaldo Lagos Palma**, don **Pedro Ulloa Castillo** y don **Edgardo Mauricio López Oportus**, en contra de **ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA (ASMAR)**, representado por don **Harold Kauer Tapia**, todos ya individualizados en la parte expositiva de este fallo, en todas sus partes.



III) Que, no se condena en costa a los demandantes por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT O-1305-2018

Dictada por **ELIECER ALFONSO CAYUL GALLEGOS**, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.



ZYWXXPCCV

A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>